

## **Declaración pública de ACT Alianza sobre América Latina y el Caribe**

Los miembros y los foros de ACT Alianza de la región América Latina y el Caribe (LAC), preocupados por las enormes contradicciones entre las grandes aspiraciones de la humanidad por un mundo mejor, reflejados en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y las realidades que muestran una profundización en las desigualdades basados en la reproducción de sistemas económicos que depredan la naturaleza de forma desmedida, nos exponen a un cambio climático inmanejable y legitiman sistemas políticos que generan retrocesos estructurales en los derechos humanos.

Entendemos que estamos frente a un cambio de época en donde se enfrentan al menos dos ideales de futuro, uno excluyente y otro incluyente. Como ACT América Latina y El Caribe, nos oponemos a que el proyecto global dominante de exclusión sea el que defina nuestro futuro, donde se beneficia a unos pocos que se apropian de la riqueza producida y excluye a la gran mayoría de la sociedad de esos beneficios, produciendo la más vergonzosa y escandalosa inequidad en un planeta que nos puede acoger dignamente a todos y todas.

Proponemos y luchamos por un proyecto de inclusión, que genere vida digna y plena para la humanidad y la naturaleza, acompañándoles con propuestas viables, sostenibles y concretas desde nuestra Fe en acción donde las tecnologías y sistemas de producción, distribución y consumo que aseguren un Oikos saludable y sostenible y las personas estén en el centro del desarrollo sostenible.

La declaración de ACT Alliance debe dar aliento a la esperanza y convocarnos a la acción conjunta de las OBF, de la sociedad civil y de otros actores que queremos ese mundo inclusivo:

**Promovemos el Estado de Derecho y una Gobernanza basada en el respeto de las instituciones democráticas:** Deben prevalecer los derechos fundamentales, de las personas, de los pueblos y de la naturaleza y se deben superar las situaciones de violencia estructural, ya que avanza la criminalización y judicialización de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes además de enfrentar de forma sistemática campañas de difamación, descalificación, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, hoy en día enfrentan procesos penales y otras formas de acoso judicial, que es una de las formas más cruenta de la reducción del espacio de la sociedad civil. En Colombia se ha asesinado a más de 350 defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales, más bien se genera un entorno que agudiza el conflicto en territorios coptados por actores armados y economías ilegales y no se implementa realmente el acuerdo de paz actual y tampoco se facilita el diálogo con el segundo grupo guerrillero ELN; En Honduras, de igual manera hay una persecución sistemática de defensores y defensoras de derechos humanos y de ambientalistas que sobrepasa los 115 asesinados, que quedan en impunidad por la falta de voluntad del gobierno; En la región presenciamos además golpes de estado, retrocesos de los sistemas democráticos, y desmantelamiento de los logros en derechos sociales, en Guatemala el principal órgano contra la corrupción International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) quiere ser anulado; queremos contribuir a superar las crisis institucionales y falta de gobernabilidad democrática, de la judicialización de la protesta y encarcelamiento y muerte política de opositores y de líderes sociales y a las medidas de retroceso social como en Brasil que congelan el gasto social por 20 años; queremos promover la paz basada en el respeto de los derechos ciudadanos y sociales y no la confrontación, la promoción del terror y violencia como en

Nicaragua; queremos apoyar medidas que superen la pobreza e inequidad y no ajustes estructurales que lleva a enfrentamientos sociales, con un número considerable de víctimas como en Haití, que no resuelven las crisis ni generan sustentabilidad; queremos que haya transparencia, y se hagan públicos los intereses de grupos de poder, economías ilegales y la corrupción han infiltrado la mayoría de las organizaciones políticas y las instituciones del Estado, produciendo una crisis políticas que ponen en riesgo el marco de derechos y la gobernabilidad, y entorpece el desarrollo de políticas públicas que reflejen las necesidades y demandas de la población, tal como en Perú. finalmente queremos superar la violencia social que está eliminando físicamente a los jóvenes e inhibiendo las opciones económicas para familias de bajos y medianos recursos, sin acciones viables y efectivas en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Pedimos a ACT Alianza que mantenga su apoyo a los procesos de paz en Colombia y que fortalezca las actividades de concienciación ante el gobierno colombiano y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la implementación del acuerdo de paz y promover el diálogo de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

**Promovemos la Justicia económica:** no es suficiente la vigencia del estado de derecho para superar las desigualdades económicas, sociales y políticas, se necesitan de políticas públicas, estrategias e iniciativas que superen la exclusión de las poblaciones más vulnerables como la niñez, y los pueblos originarios, con esfuerzos que partan de la redistribución de los recursos locales, con políticas fiscales justas y que sea base para que a nivel global se construya una arquitectura financiera al servicio de un paradigma diferente al que genera dependencia, sino una cooperación y solidaridad basada en el desarrollo sustentable inclusivo y balanceado regionalmente. En este sentido, queremos promover una justicia económica que internamente en los países se base en una justa distribución de la riqueza, incluyendo políticas fiscales y estructurales que promuevan la equidad y la superación de la pobreza, pero que también a nivel internacional la cooperación cumpla con sus compromisos, con un enfoque de sustentabilidad, eficacia y equidad de tal forma que no queden abandonadas regiones completas por prioridades geopolíticas o por argumentos como ser de renta media cuando hay una equidad escandalosa, como en América Latina y El Caribe. Queremos que las medidas de ajuste no tengan efectos adversos en la población que se ve empobrecida y con menos accesos a educación, salud y la seguridad social, especialmente de las pensiones de las personas de la 3ª edad y además con mayor endeudamiento de gobiernos como Argentina, Brasil, Colombia y Centro América. Las inversiones internacionales también deben tener un sentido de sustentabilidad con respeto a la naturaleza y fortalecimiento de las estructuras económicas locales, en este sentido debemos promover mayor dialogo entre gobiernos, sectores privados nacionales e internacionales y los sectores sociales de cada país.

**Demandamos Justicia Climática:** se deben incrementar drásticamente los esfuerzos y compromisos para que el acuerdo de Paris se cumpla, canalizando suficientes recursos para la adaptación y mitigación al cambio climático, especialmente para los más empobrecidos y vulnerabilizados, así como para proteger nuestros bienes naturales, sociales y culturales, y solo se logra si reducimos las emisiones para no sobrepasar los 1.5º C de calentamiento global. Los impactos del cambio climático nos están dejando sin alimentos, sin tierras productivas, sin fuentes de agua, sin líneas costeras, sin bosques dulces y salados, con mayor número de enfermedades relacionadas al clima y con desastres cada vez más frecuentes y más intensos. Esta vulnerabilidad se profundiza con el extractivismo, los monocultivos y crecimiento de mega y grandes ciudades, fenómenos vinculados al modelo de producción dominante. Un mal enfoque y una mala implementación de las medidas de mitigación y adaptación, por ejemplo, con la sequía, resulta en hambre, miseria y, principalmente, de falta de agua, como en el semiárido brasileño cuya política gubernamental reduccionista y fragmentada genera la llamada "industria de la sequía". Como ACT proponemos modelos

integrales de justicia climática garantizar los recursos naturales, usando energías renovables, captación, almacenamiento y reutilización de agua; con plantas resistentes a la sequía sin manipulación genética y con políticas públicas de convivencia con la sequía.

**Demandamos Justicia de género:** La distorsión y estigmatización de la perspectiva de género, a la que los movimientos políticos tradicionales y patriarcales llaman “ideología de género”, muchas veces en alianza con fundamentalistas religiosos, está trayendo consigo el no respeto a derechos y retrocesos en los logros por la equidad y justicia de género, tanto en visiones, leyes, políticas públicas, que generalizan la violencia de género, incluyendo violaciones y feminicidios con impunidad, feminización de la pobreza, precarización del trabajo de las mujeres y baja tasa de participación en el ámbito público. Se evade la educación y puesta en práctica de los derechos sexuales y reproductivos, que se traduce en embarazos en adolescencia y otros efectos que lastiman principalmente a los y las jóvenes y muchas veces se transforma en legislación como las legislaciones de familia en Nicaragua y en El Salvador, que profundizan las vulnerabilidades y falta de oportunidades para las mujeres, con falta de oportunidades para salir de una concepción patriarcal y reduccionista. Los pocos derechos alcanzados por las comunidades LGBT en la región, se están viendo gravemente amenazados, es la población con mayores ataques por parte de los fundamentalistas, con discursos de odio y exclusión que traen consigo oleadas de violencia y muerte contra la comunidad LGBT. Queremos superar y dimensionar un enfoque basado en la justicia de género, que supere la falta de leyes que protejan a la población, especialmente a mujeres, y supere los discursos y acciones de odio, las campañas de desinformación y desprestigio para no impartir Educación sexual en los colegios, oponerse eficazmente a la invisibilización, distorsión o eliminación de conceptos como equidad de género y derogar legislaciones que penalizan el aborto aun en caso de ser espontaneo.

**Demandamos Justicia para las poblaciones migrantes y desplazadas,** que son expulsadas y desarraigadas de sus territorios por violencia social, política, económica y ahora también por efecto del impacto del cambio climático. Estos desarraigos suponen en la mayoría de los casos separación familiar, explotación, trata de personas, trabajo esclavo, apátridas, que atentan contra la dignidad humana y sus derechos como personas. Queremos contribuir a la protección efectiva de los derechos para refugiados y migrantes, pedirle a los estados que cumplan con esta obligación, incluyendo el derecho a asilo, como lo pide la Caravana de Migrantes que se dirige de Centroamérica a estados Unidos. Queremos ser solidarios con países, con graves problemas de abastecimiento que pone en riesgo la seguridad alimentaria y generan una ola de migrantes como el caso de Venezuela que tiene un éxodo que ya alcanza dimensiones inmanejables. También queremos ser solidarios con poblaciones que quedan apátridas, por crisis sociales estructurales como Los Dominicanos de origen Haitiano, lo que niega su dignidad y sus derechos.

## NOS COMPROMETEMOS

A continuar acompañando Las luchas de nuestras Comunidades inspirados por el amor incondicional de Dios para todos y todas, pero preferencialmente las de aquellas que quieren ser dejadas atrás en sus aspiraciones a vivir dignamente en medio de las contradicciones e injusticias de las que no son directamente responsables.

Consideramos en este contexto de profundos contrastes que es necesario enfocar nuestra atención y nuestros esfuerzos de acompañamiento y promoción de los defensores de derechos humanos, de la Justicia económica, la defensa de la creación y contribuir al fortalecimiento de la gobernanza en contextos locales que llevan a crisis estructurales.